

Cananea

CUANDO VINO EL GRUPO MÉXICO,
“HAGA DE CUENTA QUE LLEGÓ EL DEMONIO”

ARTURO CANO

Enero 2015

©Arturo Cano

Esta publicación es financiada con recursos de la RLS con fondos del BMZ y Para Leer en Libertad A.C.

**www.rosalux.org.mx
brigadaparaleerenlibertad@gmail.com
www.brigadaparaleerenlibertad.com**

Cuidado de la edición: Alicia Rodríguez y Jorge B. Fernández.
Diseño de interiores y portada: Daniela Campero.

El asalto 2010

La toma “pacífica” de la Mina de Cananea

7 de junio. Manny Armenta lo miró con sus propios ojos: el desalojo de la mina de Cananea no fue pacífico, como dice la Secretaría de Gobernación. “Yo fui de quienes propuso a la gente replegarse al edificio del sindicato; había mujeres, niños, muchos jóvenes. Hasta ahí fue la policía a echar gases lacrimógenos, y la gente se tuvo que salir por las ventanas.”

En la funeraria cercana se suman otros testimonios. El muerto se quedó solo porque los deudos salieron con los ojos llorosos por los gases de la Policía Federal (PF). Mineros, lugareños y periodistas atesoran cual *souvenirs* los restos de la desigual batalla: casquillos de bala de distintos calibres, cilindros de gas lacrimógeno, bolas de metal lanzadas con quién sabe qué. En la calle que conduce a la entrada principal de la mina de Cananea los rastros de la batalla son piedras sobre el pavimento y dos vidrios rotos en una mueblería abandonada, cuya propiedad se atribuye a familiares del gobernador panista Guillermo Padrés, oriundo de este lugar.

Los testimonios de trabajadores de la minera Cananea coinciden con el de Manny. La toma de la mina se hizo no por las puertas custodiadas por los mineros, sino por la parte trasera de los gigantescos cerros mochos llenos de cobre.

Las fuerzas federales contaron con apoyo estatal y municipal; aquí nadie se quejó de falta de coordinación entre niveles de gobierno, como ocurre en la lucha contra la delincuencia. Las tres fuerzas, pues, entraron por la parte atrás, por un rancho y un basurero, para consumir el fin de una huelga —ya establecido en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ilegal, según el sindicato minero— que ha costado mil 500 millones de dólares o el doble a los dueños de la minera, dependiendo del informe que se dé por bueno de los emitidos por el consorcio de Germán Larrea, el Grupo México.

Las pérdidas del también dueño de Pasta de Conchos son significativas, pero poco le dicen a los miles de canaenenses, que dependen indirectamente de la mina y que han padecido el cierre. O sí, porque tan larga como la huelga es la campaña negra contra la sección 65 del sindicato minero y contra su secretario general en el exilio (dorado, ciertamente, en Canadá). Largas son las dádivas para dividir a los mineros y a los lugareños, con el resultado de una ciudad partida que este día escucha en taquerías y cafés, en los autos y todas las casas, el luminoso futuro que prometen el gobernador, el secretario del Trabajo, Javier Lozano (mentadas en la asamblea minera), y el director ejecutivo de Grupo México.

Para no ir más lejos, la región le debe a la larga huelga que el Gobierno Federal prometa, desde Hermosillo, cumplir el viejo sueño de carreteras de cuatro carriles entre esta ciudad, Imuris y Agua Prieta. La enorme lista de promesas hace tocar el cielo a los canaenenses, incluyendo a los mineros, a quienes les ofrecen liquidación y recontractación, que inmediatamente es rechazada: “Queremos trabajar conforme al contrato colectivo”.

¿Ya ven? La clase obrera sí va al paraíso, siempre y cuando abandone la huelga.

La mentirilla de la toma pacífica es un pecado menor. Como lo es que las autoridades digan que los agentes no portaban armas de fuego, aunque hay fotografías que muestran lo contrario. Como lo es la detención de cinco mineros, entregados a la custodia de autoridades municipales hasta el mediodía, 16 horas después de ser aprehendidos, sin cargos, “sólo para investigación”, según le informan a René Saracco, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Es grave que los hayan tenido incomunicados y que además nos hayan negado tenerlos detenidos.” Tanto la Policía Federal (PF) como la policía ministerial del estado negaron tener detenidos, hasta que una funcionaria municipal permitió localizar a Luis Alberto Torres, Rodolfo Valdez Serrano, Luis Borbón Pérez, Marcelo Lara y Everardo Ochoa.

Los cinco mineros detenidos refieren a los funcionarios de derechos humanos, además, que los tuvieron varias horas en el cerro, hincados y amarrados con lazos. Todo, durante la toma “pacífica y legal” del secretario Gómez Mont.

“El gobierno mexicano miente”, dice el ciudadano estadounidense Manny Armenta, quien tiene dos cosas en común con los echados de la mina: también es minero y trabaja para el mismo patrón, el mexicano Germán Lareira, dueño de Asarco, empresa con minas en Arizona.

La organización de Armenta (United Steel Workers, USW) ha tenido presencia permanente en Cananea y esta mañana, apenas se confirman los datos del desalojo, Leo W. Gerard, presidente de USW internacional, declara: “El presidente de México, Felipe Calderón, ha puesto en marcha un régimen de terror contra los trabajadores”.

La agrupación sindical hace un llamado al Congreso de Estados Unidos para detener la entrega de fondos a las fuerzas de seguridad mexicanas, puesto que pueden ser utilizados para atacar a los trabajadores que ejercen su libertad de asociación.

Van a echar pedradas

Dos helicópteros que vuelan bajito dan la bienvenida a Cananea. Los cerros enormes, barquillos invertidos rebanados por un cuchillo gigante, hacen que la ciudad parezca una maqueta brillante. Las calles lucen más solitarias en tanto los visitantes se acercan más a la mina. Al mediodía los comercios y escuelas más cercanos están cerrados. Pero conforme se acerca la tarde comienzan a abrir.

“*Ámonos*, porque van a empezar a echar pedradas”, grita un niño y echa a correr. Pero nada pasa. No a esta hora de la tarde. Los gases volaron de madrugada, los tiros tronaron a la misma hora (dos heridos leves,

dicen las autoridades). Un incendio no esclarecido (es decir, no se sabe qué bando lo inició) acabó con unas oficinas antiguas de la minera.

Más tarde, las fuerzas federales —dos mil policías contra 900 mineros en lucha— la emprendieron contra el local de la sección 65 del sindicato minero, para desalentar, dicen los dirigentes, cualquier intento de reorganización o una aventura de retoma. Los policías lanzan gases contra la puerta donde cuelga una manta enviada por los padres de los niños muertos en el incendio de la guardería ABC, que dice: “Los agresores de los mineros son los asesinos de nuestros hijos”.

A eso de las 10 hay un agarrón de mineros contra policías. La presencia de los agentes federales en las calles de la ciudad es vista como una afrenta. Después de gases de un lado y pedradas del otro, los federales se replegaron a la mina. “Que se queden allá, al fin que ya la tienen”, dice un trabajador.

Ya la tienen, y con ella Grupo México se enfilará, con su filial Asarco en Estados Unidos, a volver a la competencia contra la principal productora de cobre del mundo, la chilena Codelco.

El sindicato minero lanza un comunicado mañanero en el que hace responsable al gobierno de Felipe Calderón de los resultados de violencia y sangre que se puedan presentar en adelante. También exige de manera terminante que este gobierno dé marcha atrás en esta invasión militar e ilegal de la mina de Cananea, meta al orden a Grupo México y lo obligue a negociar una solución pacífica del conflicto.

Pero más allá de esas fórmulas no se ve muy claro cómo responderán los mineros al descuentón. A media tarde, el comité de huelga sostiene una videoconferencia con el comité nacional del gremio. Abundan los reproches y las denuncias no documentadas: Uno de los detenidos informa que hay dos muertos adentro. “¿Y para cuándo el paro nacional? ¡Desde que empezamos están con eso y nada!”, le llueve a Sergio Beltrán y otros dirigentes nacionales.

Jesús Verduzco, presidente del comité de huelga, nomás resopla con las informaciones de muertos, de ambulancias que salen con algo envuelto en sábanas: “Son meras suposiciones”.

A falta de otra estrategia, ocultos los principales líderes (Sergio Tolano, secretario general, y Juan Gutiérrez, delegado del comité nacional) por los rumores de órdenes de aprehensión en su contra, unos centenares de trabajadores marchan al palacio municipal, en busca de sus detenidos.

A los pocos minutos llegan cien elementos antimotines, estatales y municipales, que amagan con sus toletes. Hay insultos a granel y ratos tensos que se rompen cuando una aguerrida mujer descubre que un policía porta su escudo al revés: “¡Pendejo, ni sabes lo que haces, ni sabes leer!”. A la risotada sigue la información del sitio donde tienen a los cinco detenidos.

Los trabajadores acuden a la oficina del Ministerio Público, donde torpemente las autoridades federales llevan a los detenidos, dado que es un punto muy cercano a la puerta principal de la minera.

Más tarde, en uno de los muchos mítines vespertinos, hablan de dos detenidos más: “Les dieron agua hasta que llegamos nosotros a verlos”.

Por ahí anda también el fotógrafo local Alfredo Zambrano, detenido y golpeado por policías federales porque, según su testimonio, les tomó fotografías trepados en una cuatrimoto y una camioneta propiedad de los mineros.

En la espera se desgranán los testimonios de la participación de un grupo de porros en el desalojo, del pueblo dividido que es Cananea (para corroborarlo, un individuo que pasa en su auto grita: “¡Mitoterós!”).

El alcalde Reginaldo Moreno la hace de pitoniso a toro pasado: “El desalojo era algo que se veía venir”. Aunque añade que todo en el municipio funciona normalmente, declara la ley seca desde las 10 de la mañana. A los mineros, sin embargo, se les ven muchas ganas de mentar madres, pero no de tomarse unas cervezas.

Igual, hoy no les está permitido, porque las autoridades se cansaron al fin. El gobernador Padrés, natural de esta tierra, había prometido que no se emplearía la fuerza, pero hoy resume el ánimo de la autoridad: “Hemos sido muy prudentes y muy tolerantes”.

Sí, y además nadie les puede reprochar el tino histórico. Justo hace 104 años, el 6 de junio de 1906, las actividades de la minera de Cananea regresaron a la normalidad, tras la muerte de veintitrés mineros y la detención de los líderes de la huelga. El *operativo* federal de 2010 comenzó la noche del 6 de junio. ¿El homenaje será parte de los festejos del centenario de la Revolución?

Inventan Lozano y Grupo México nuevo líder minero en Cananea

10 de junio. Rupertino se sacó la lotería. Aunque ni los actuales ni los futuros trabajadores de Cananea lo saben, el tamaulipeco Rupertino García Reyes es ya su dirigente sindical. Residente de Monterrey, el nuevo líder es integrante del comité ejecutivo de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), agrupación creada y alentada por poderosos empresarios de la capital de Nuevo León, dueña de contratos colectivos de trabajo en muchas partes del país y crecida como frijol mágico desde que los panistas de la “nueva cultura laboral” llegaron al poder.

“Es un sindicato blanco entre los blancos”, define el experto laboral Anselmo García. Y una creación de algunas de las mayores empresas neoleonesas, que la parieron para evitar tratos con agrupaciones “radicales”, como la CTM o la CROC.

Durante muchos años, la FNSI fue dirigida por el abogado Juan Manuel Zapata, a quien de pronto le descubrieron un fraude millonario con la construcción de viviendas, escuelas y hospitales. Los gerentes de empresas como Femsa, Cemex y Cervecería Cuauhtémoc, que según fuentes sindicales son los verdaderos jefes de la federación sindical, le perdonaron el ilícito a cambio de una jubilación temprana. Al frente quedó entonces el

también abogado Jacinto Padilla Valdez, con domicilio en Isaac Garza Oriente 311, en el centro de Monterrey. La misma dirección de Rupertino, claro.

De la FNSI se conocen datos a cuentagotas. Sus dirigentes son reacios a las apariciones públicas y sólo se sabe de ellos cuando se toman la foto con funcionarios gubernamentales, sobre todo neoleonenses, con quienes desde hace años comparten “misión y visión”, en el afán de impartir cursos con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Tras la *toma* de Cananea por fuerzas federales, la FNSI asomó la cabeza mediante un despliegado de prensa, preparando el terreno para la llegada de Rupertino, a la mina sonoreense, con bombo y platillo.

La mencionada federación ha sido siempre encabezada por abogados laborales expertos en la venta de contratos de protección. “En sus filas tiene un lugar especial Rupertino García, quien sí fue trabajador. Es el operador, el obrero”, describe un líder sindical que lo ha tratado.

Con casi nula experiencia en el ramo, pues había sido empleado de Papas y Fritos de Monterrey (Kodys, ahora de Bimbo) y dirigente de un sindicato de la industria alimentaria, Rupertino pasó de asesor sindical (en 2002) a flamante dirigente minero hace menos de cuatro años. García lo puso así en su hoja de vida: “En el mes de noviembre de 2006 fui nombrado secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana (SNTEEBM), adherido a la FNSI”.

Según información de la Secretaría del Trabajo federal, el sindicato de Rupertino tiene el número de re-

gistro 5770 y apenas cien afiliados, aunque el dato seguramente no ha sido actualizado, porque desde hace unos años el Grupo México ha entregado varios contratos al sindicato en cuestión.

Según su propia información, la FNSI nació en marzo de 1936, para agrupar a los sindicatos de Vidriera Monterrey, Cervecería Cuauhtémoc, Fábricas Monterrey, Cementos Mexicanos, Círculo Azul, Casa Holck, etcétera. Actualmente cuenta con aproximadamente dos mil 400 grupos y una membresía de 230 mil socios. Hoy forma parte de la Alianza Sindical Mexicana, frente sindical promovido por el foxismo para hacer contrapeso a las organizaciones gremiales vinculadas al PRI.

En unas líneas de sus propios documentos, la FNSI de Rupertino deja claro por qué fue elegida por el Grupo México y el secretario Javier Lozano Alarcón, para tener el contrato colectivo que surja tras la destrucción del sindicato minero:

“... las relaciones laborales, entre administradores, sindicato y federación, se caracterizan por el respeto, la armonía, la suma de esfuerzos, la apertura en la comunicación, una planeación conjunta de las acciones administrativas y de capacitación para la calidad y la productividad, una verdadera representación sindical enfocada no sólo para hacer respetar los derechos de nuestros asociados, sino también para buscar que estos cumplan con sus obligaciones, lo que nos ha permitido romper con los paradigmas en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo, que nos han llevado a negociar de una manera medida, en base a los resultados de productividad, sin

desgaste de energía y de tiempo, buscando beneficios en común. Por esto y mucho más, nuestra federación está ya inmersa en la nueva cultura laboral”.

A mediados de 2007, el sindicato de Rupertino contaba apenas con 100 miembros. El 29 de junio de ese año demandó la titularidad de los contratos colectivos de ocho empresas y para el 5 de septiembre los había ganado todos. Casualmente todas las empresas pertenecen al Grupo México. En un solo pase, el sindicato de Rupertino pasó a dirigir casi cuatro mil trabajadores, mientras su dirigente tomaba cursos de productividad y competitividad bajo el auspicio del Consejo de Relaciones Laborales del Estado de Nuevo León.

¿Quieren que se acelere toda Cananea?

Muy de mañana, los contratistas del Grupo México son recibidos por piquetes de mineros que bloquean los accesos a la mina, con piedras en los caminos. Por delante van policías estatales a abrir paso. QUITAN las piedras en la puerta 2. Los mineros las vuelven a poner. Las camionetas de la policía pasan por encima de ellas. A las 6:45, los elementos de la Policía Federal que resguardan el lugar se lanzan sobre los mineros y los dispersan con gases. Pero no quedan contentos. Los persiguen por las callejuelas de la colonia Cananea Vieja. Los trabajadores les lanzan piedras. Los policías las regresan.

Dos mineros buscan protección en la casa de la familia Durán. Hasta ahí llegan los policías echando mentadas. Golpean la reja con sus toletes. Exigen que les entreguen a los mineros. Los mandan al diablo. “No sé qué

tiene este gobierno jodido, ¿quiere que se acelere toda Cananea?”, dice Alfonso Durán, el abuelo de la familia. “Aquí tenemos niños, nos aventaron sus gases esos... Si se mete un cabrón de esos yo le doy un plomazo.”

A unos pasos está el camino que conduce a la puerta 2 de la mina. En la persecución, tres trabajadores son alcanzados y uno, Ricardo Díaz, recibe un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza. Un policía federal, según testimonio de los mineros, se lleva una pedrada en la cara.

Pero no son los únicos que se llevan golpes, ni los únicos con los ojos llorosos y la cara de angustia que dejan los gases.

La Policía Federal logra despejar el acceso y entran vehículos particulares con los esquirols, pipas de agua, camiones con maquinaria y autobuses repletos de más policías (a partir de este viernes, por cierto, no hay espacio disponible en los hoteles locales, ya de por sí llenos de agentes federales y estatales).

Sentada en el quicio de su puerta, Edith Carmoña, niña de segundo de secundaria, trata todavía de jalar aire y se seca con su toalla rosa. “Adentro está mi abuelito, Sixto Zepeda, que no puede caminar.” Edith tiene un tío minero, pero muchos de los vecinos nomás pagan el pecado de vivir cerca de la mina. “Que les tiren a ellos (los mineros), nosotros aquí tenemos criaturas”, dice Ramón Verdugo, al tiempo que muestra los cartuchos de gas lacrimógeno. “¡Y para colmo ni tenemos agua!”, grita su esposa a un lado.

En varias calles a la redonda los vecinos se quejan de lo mismo, mientras muestran cartuchos y piedras.

Mire, ésta cayó aquí, enseña un rocón una viejita de noventa años. Una voz dentro de la casa dice: “Que se metan aquí, desgraciados, aquí tengo un hacha”.

En la loma que se divisa desde la calle Veracruz, los policías celebran su triunfo a pura palabrota: “¡Ora sí vengan, hijos de la chingada! ¿Eso querían, culones? ¡Vengan por más!”.

Un funcionario de protección civil municipal pregunta en cada casa si necesitan un médico. Luego va a pedir al oficial al mando que se limiten a proteger la mina y no incursionen en las casas: “Pero si aquí hemos estado, ¿no nos ve?”.

Va a costar, pero recuperaremos la mina

Tucson y Cananea, 9 de junio. La tarde del domingo pasado, Sergio Tolano, dirigente de los mineros de Cananea, enterró a su abuela. Tras el sepelio, tomó camino a Hermosillo, a dejar a sus familiares. Para entonces ya había comenzado a recibir llamadas desde la capital del estado: le informaban que un fuerte contingente de policías federales se dirigía hacia la población minera.

No era la primera vez que le avisaban que ya venía el lobo, así que agarró camino, confiado en la promesa del gobernador panista Guillermo Padrés, quien había asegurado a los mineros que el conflicto no se resolvería con la intervención armada.

Tolano tuvo de dar vuelta atrás en la sierra, impresionado por el enorme convoy de las policías federal

y estatal que iba rumbo a Cananea. “Traté de rebasarlos, pero no pude”, dice, apenas concluye la asamblea en la cual cientos de trabajadores reafirman su convicción de resistir. El secretario general de la sección 65 lo pone así: “Vamos a ser muy medidos y muy inteligentes en nuestras estrategias para recuperar la mina; no vamos a poner en riesgo la vida de nuestros compañeros.”

Ya no hay gases ni pedradas, menos tiros, pero sí la resistencia de los mineros que Tolano resume: “Nos vamos a reorganizar, vamos a bloquear todo. Va a costar, pero vamos a recuperar la mina”.

Se ve lejos, dado lo disparejo de las fuerzas, pero en éstas andan. Esta mañana, muy temprano, comienza el juego de toma y daca entre Grupo México y los gobiernos estatal y federal, de un lado, y los trabajadores, del otro.

Al ver que la empresa comienza a enviar sustitutos, los trabajadores bloquean con piedras la calle que conduce a la puerta tres del yacimiento. Un convoy de la policía estatal baja y retira las piedras, que los trabajadores vuelven a colocar. Así se la pasan un rato.

Luego, los trabajadores se van a una asamblea donde el abogado Luis Chávez explica que la ocupación de la empresa obedece a una averiguación previa abierta en la Procuraduría General de la República (PGR) por una denuncia de supuestos daños causados a las instalaciones de la minera. Según el abogado, una diligencia para cuantificar los supuestos daños — no el laudo que dio por terminadas las relaciones laborales — fue el motivo de la ocupación de la mina por más de dos mil policías.

El litigante considera que el despliegue carece de toda lógica jurídica, dado que aun con la huelga, el Grupo México siempre mantuvo su cuerpo de seguridad dentro de la mina. Según Tolano, hasta unos cincuenta elementos por turno se hacían cargo de la vigilancia de los equipos e instalaciones, y ningún trabajador podía desplazarse solo por el interior.

Aun así, la empresa denuncia la desaparición de todo el cableado y la destrucción de los equipos de control. Tolano concede: “Los trabajadores hubiéramos preferido pagar cualquier daño que destruir nuestro contrato colectivo”. Según el dirigente, “si faltan equipos será porque ellos los sacaron en su propio tren”.

A los cabrones vamos a demostrarles cómo semos

Tolano no le entra al tema de la escasa solidaridad de otras fuerzas sindicales. “Sus razones tendrán”, asegura, aunque también pide a dirigentes de otros gremios no olvidar que va a llegar su turno en el momento que “se le hinchen los dedos” a Felipe Calderón.

Del otro lado de la frontera, donde Grupo México tiene poco más de mil 500 empleados sindicalizados, en Arizona y Texas, “se preparan acciones fuertes que no vamos a revelar por ahora”, dice Manny Armenta, dirigente del sindicato de trabajadores del acero (USW, por sus siglas en inglés).

Señala que líderes de dicha agrupación hablaron con representantes del gobierno mexicano en las recientes visitas del presidente Felipe Calderón a Estados Uni-

dos y Canadá. “Incluso hablamos con el secretario Javier Lozano, pero todo lo que nos dijo salió al revés.”

Desde Washington, la AFL-CIO —la central sindical más importante del norte— se suma a la postura de su afiliada USW y condena enérgicamente los ataques contra los mineros y sus familias en Cananea y Pasta de Conchos. En voz de su presidente, Richard Trumka, demanda al Congreso estadounidense no autorizar más fondos para las fuerzas de seguridad mexicanas, en el contexto de la Iniciativa Mérida, porque el gobierno de Calderón los está utilizando “para darles en la madre a los trabajadores”, como dice Armenta, hijo de una sonoreNSE.

Grupo México, explica Manny, tiene intereses en Sudamérica, México y Estados Unidos. “Ellos (los empresarios) se reúnen para ver dónde pueden producir más barato; se ponen de acuerdo sin que nunca les importe la gente, pero cuando nosotros nos reunimos sin importar las fronteras, los gobiernos nos ven como una amenaza. La USW se ha enfrentado también a Grupo México, con una huelga de cuatro meses en 2005. Actualmente tenemos algunos problemas locales, pero aquí se han topado con plancha”, dice Armenta.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, recuerda la defensora de los derechos humanos Isabel García, grupos de activistas de Arizona comenzaron a relacionarse con los mineros de Cananea. “Los apoyamos cuando Salinas le vendió la mina a esa familia canalla”, señala mientras espera, en el parque Kennedy de Tucson, la llegada de un grupo de voluntarios que ha hecho a pie la ruta de los migrantes, desde la frontera.

De hecho, el trato entre el sindicato minero y la USW se ha afianzado en los últimos años, justo cuando comenzó la confrontación de Napoleón Gómez Urrutia con las administraciones panistas. La acción de la USW fue clave, por ejemplo, para que el gremio minero fuera admitido, quemando trámites, en la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera. Ese apoyo de muchas partes del mundo — señala Armenta — exaspera a gobiernos y a los dueños de las minas: “No les gusta, dicen que ahora no deben luchar contra uno, sino contra una bola de cabrones”. Dueño de un español pueblerino y uno de los últimos en salir de la oficina del sindicato en Cananea, cuando la Policía Federal echó gases el pasado domingo, remata sobre esa queja: “Ahora es cuando los cabrones les vamos a demostrar cómo semos”.

Un gesto unilateral seis veces superior a lo previsto en la ley

La radio local machaca todo el día con el enorme anzuelo que Minera de Cananea dirige a sus trabajadores: “en un gesto unilateral, la empresa te ofrece, compañero, una liquidación conforme al contrato colectivo, que es un promedio seis veces mejor que lo que marca la Ley Federal del Trabajo”. El generoso “gesto unilateral” invita a los mineros a abandonar el sindicato (“la decisión es sólo tuya”), ofrece cinco números telefónicos y advierte que, naturalmente, el pago se hará en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en Hermosillo, no aquí. Pese a la oferta, Tolano cree que no los van a dividir. “Ya son

tres o cuatro ocasiones que han hecho ofertas similares, que no se han aceptado.”

Eso dice el secretario general, sentado en su oficina, con la foto de Napoleón Gómez Urrutia, ahora residente en Canadá, sobre su cabeza. A la izquierda, como mirando a su hijo, está la foto del anterior secretario general, Napoleón Gómez Sada.

—¿No les va a afectar que la población de Cananea esté dividida?

—No lo podemos negar. Nosotros no hemos trabajado con la población; en cambio, Grupo México ha mandado gente a dividir a la comunidad. Es cosa de que hablemos con ellos, porque aquí no hay comerciantes ni empresarios beneficiados por la empresa. Grupo México no compraba aquí ni un clavo ni un jabón. Toda la derrama era de nosotros, los trabajadores.

Con todo y que no confían en él, los dirigentes mineros se reúnen este jueves, en Hermosillo, con el gobernador Guillermo Padrés, originario de este municipio. “No esperamos nada, pero vamos para que no digan que nosotros somos los cerrados”.

Con su colección de amparos bajo el brazo, interrumpiendo a ratos la entrevista por trabajadores que se lo cotorrean, el rollizo secretario general de la sección 65 jura: “En cualquier momento aquí va a estallar algo más fuerte. Esto apenas comienza”.

“Aquí todos somos *pitchers*”

11 de junio. “Siempre pasa igual, siempre hacen lo mismo estos canijos”, dice la voz en la sala oscura. No se refiere a la empresa ni al gobierno de Felipe Calderón, sino al partido de fútbol entre las selecciones de México y Sudáfrica, que los trabajadores acaban de presenciar en una gran pantalla, en el auditorio de la sección 65 del sindicato minero, donde apenas la madrugada del lunes fueron desalojados por los gases lacrimógenos de la Policía Federal.

El encuentro deportivo llegó con la hora del desayuno para los habitantes del centro del país, y dos horas antes para los mineros de Cananea, quienes se reunieron de nuevo con el amanecer, aunque con la instrucción muy clara de sus dirigentes de no hacer olas este día, y no por el arranque del Mundial de Fútbol, sino por la cita que esta tarde tienen en la Secretaría de Gobernación.

De modo que los policías federales se llevan la fiesta en paz, sabedores de que los mineros no intentarán, por hoy, bloquear las entradas de la mina para evitar el ingreso de esquiroles.

En los accesos de la mina hay menos agentes que en días anteriores. También los granaderos deben estar viendo el empate.

Afuera de la sede de la sección 65, varios grupos de mineros hacen tiempo mientras sus compañeros miran el partido. “Pues la verdad acá somos beisboleros y

basquetboleros”, dice el viejo minero Miramón, con más de 35 años de servicio. “Sí, aquí todos somos *pitchers*”, dice, entre risas otro minero, en referencia a las pedradas que han lanzado en días pasados. “Y campeones de los 100 metros con obstáculos”, suelta otro, a propósito de las corretizas que les han puesto las fuerzas del orden.

Dentro del auditorio, cuando un jugador mexicano es derribado por un sudafricano, y antes de que salga la tarjeta amarilla, los mineros lanzan mentadas y exclamaciones que en días recientes le habían dedicado al secretario del Trabajo, Javier Lozano.

Claro que el gol de Rafael Márquez es celebrado con gritos y brazos en alto, pero concluido el encuentro los mineros salen a la ciudad semivacía y se recargan en sus carros con los cristales pintados: “Somos mineros, no delincuentes” y “Fuera fuerzas federales”. Mezclados con las consignas político-sindicales, hay letreros que apoyan a Analy y Karen, candidatas a reinas de la Feria del Cobre, suspendida el año pasado por la huelga minera.

No está claro qué tipo de fiesta será, en virtud de que continúa la prohibición de venta de alcohol, decretada por el ayuntamiento en apoyo a la recuperación de la mina, pero ya en la plaza principal están listos algunos juegos mecánicos, así como los puestos de venta de cacharros y churros. El kamikaze es el más cercano al pequeño monumento consagrado a los Mártires de 1906, que tiene inscritos los nombres de los obreros asesinados por los *rangers* de Arizona traídos por la Cananea Consolidated Copper Company.

A unos pasos languidece el Museo de la Lucha Obrera. Un anciano, el único empleado, coloca sillas de

plástico en el pequeño patio. “Aquí hacemos el inicio de la semana cultural, que es parte de la Feria del Cobre.”

Museo olvidado

En este museo funcionó durante setenta y cinco años la célebre (por el corrido) cárcel de Cananea y hay algunas placas que informan que en este lugar estuvieron presos los líderes de la huelga de 1906 y otros luchadores sociales, hasta que se hizo museo en 1980.

Por el lugar nunca ha pasado un museógrafo. Se guardan algunas viejas máquinas de escribir, es de suponerse que de los primeros años de la mina, y algunos, pocos, objetos relacionados con la explotación del cobre. Una maqueta hecha en 1952 anticipa la entrada al salón dedicado a fotos viejas de Luis Donaldo Colosio y su familia, pero la foto en la entrada principal del recinto es de Carlos Salinas de Gortari saliendo de la cárcel de Cananea, con Colosio atrás, en la tercera fila.

Entre sus numerosas ofertas, el Grupo México ha ofrecido invertir en la biblioteca, un centro de cómputo y el museo de la propia empresa. El de la lucha obrera no fue mencionado.

2013

La resistencia

La “nueva era” que nunca llegó

10 de junio. Una “nueva era” anunciaron el gobierno de Felipe Calderón y el Grupo México, del empresario Germán Larrea, después de que la Policía Federal tomó la mina de cobre más grande del país. El primer paso fue eliminar el histórico nombre de Minera de Cananea: la mina fue rebautizada como Buenavista del Cobre.

“Al parecer cualquier cosa que diga Cananea le duele al Grupo México, quieren que se olvide, que se borre la historia”, dice Victoriano Carrillo, un minero que nunca pierde la sonrisa, encargado de gestionar la atención médica para sus compañeros, luego de que la empresa cerrara el hospital que, por contrato, debía atender a los trabajadores y sus familias.

La “nueva era” de Cananea fue un rosario de promesas: una carretera de cuatro carriles, un hospital, calles pavimentadas, becas y créditos, un futuro luminoso.

Tres años después, finalizado el gobierno de las promesas, apenas hay unos cuantos kilómetros de asfalto, un esqueleto que algún día será hospital, aunque ya no a cargo de la empresa de Germán Larrea sino del gobierno,

y un montón de galerones donde se hacinan los nuevos trabajadores, “gente del sur” muchos de ellos y libres ya — en su mayoría — del “pecado” de ser sindicalizados.

Pese a que buena parte de los casi cinco mil empleados de Cananea son de fuera, ni los gobiernos federal ni estatal, y mucho menos la compañía han emprendido un programa de construcción de viviendas. Eso sí, hay dos nuevos supermercados y dos casinos que no existían cuando la PF acabó, a golpe de gas lacrimógeno, con la huelga de la sección 65 del sindicato nacional minero, en junio de 2010.

La primera imagen de Cananea no es de bonanza, sino de “seguridad”. Al llegar desde Imuris, dan la bienvenida dos camiones y una camioneta del Servicio de Protección Federal (SPF), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ya han descendido, y se disponen a la formación, los granaderos que abandonaron los uniformes con las siglas de la Policía Federal (PF) con el cambio de gobierno.

A lo lejos aparecen dos camiones amarillos, de los que transportan a los escolares en Estados Unidos (la frontera está apenas a veinte kilómetros). No hay casas a la vista, porque desde la incursión policiaca se bloquearon los accesos ubicados dentro de la población.

Los autobuses pasan frente a los veinte granaderos que ya empuñan sus escudos, aunque hace mucho los sindicalistas no avientan una piedra.

Sobre una loma y junto a una capilla, otros elementos, R-15 en ristre, custodian la salida. La escena se repite en otro de los accesos a la mina y lo mismo ocurre en cada cambio de turno.

“Protección Federal”, se lee en los vehículos y los uniformes. “Ahí está la seguridad privada de Larrea”, dicen, con ironía, los mineros de la sección 65.

“No entendemos por qué el gobierno federal pone todo al servicio de una empresa privada, cuando se supone que la policía debe ser para proteger a toda la población”, añade el minero Clemente Félix Lara.

“Deja a Napoleón y te arreglo todo”: Lozano

Sergio Tolano, secretario general de la 65, recuerda que la llamada lo sorprendió, pero hoy ríe al recordarla.

“Te está hablando el ministro del Trabajo del Estado mexicano. Si dejas a Napoleón te voy a solucionar todo el problema de Cananea”, dijo la voz del otro lado.

Era Javier Lozano, secretario del Trabajo de Felipe Calderón, ex priísta, ideólogo panista y hoy senador de la República. Faltaban unos meses para la toma de la mina por la Policía Federal, y Tolano pidió a Lozano enviar la solicitud por escrito, pero no dirigida a él, sino al secretario nacional del gremio, Napoleón Gómez Urrutia.

“No voy a mandar nada. ¿Crees que todos los días le hablo al secretario de una sección?”, cortó el atildado funcionario.

Tolano apenas rebasa los cuarenta años, pero en los últimos tres se ha comido una década. De oficio soldador, entró a trabajar a la Minera de Cananea hace veinticuatro años y recorrió todos los escalones laborales

y sindicales. Fue electo secretario general un mes antes del inicio de la huelga.

De Tolano y otros mineros que siguen de “guardia” sorprende sobre todo una cosa: su lealtad al sindicato nacional y a Napoleón Gómez Urrutia.

Ni siquiera el espinoso tema del fideicomiso de cincuenta y cinco millones de dólares (cinco por ciento del valor de venta de la mina en 1989), base de la acusación de los gobiernos panistas contra Gómez Urrutia es un tema que provoque fisuras.

—El cinco por ciento se nos entregó a muchos, y a los que no, fue porque llegó la Procuraduría General de la República y nos congeló las cuentas, incluyendo otras de la sección. En 1990 a mí me entregaron ochenta mil pesos — dice Tolano, y da por cerrado el tema.

La lealtad, según los dirigentes de la 65, tiene bases muy firmes. Si rechazaron una y otra vez la oferta de soluciones condicionadas a “dejar a Napoleón”, fue no sólo porque Gómez Urrutia es el heredero del líder histórico del gremio —su padre, del mismo nombre, lo encabezó durante cuarenta años— sino también por razones que Tolano resume en frases como las siguientes:

“Con Elías Moreno (el dirigente reconocido por el gobierno panista durante algún tiempo) perdimos el bono de productividad.

“A Fernando Gómez Mont lo vi primero como apoderado legal de la empresa y luego como funcionario del gobierno. Ahí está el problema: ¿Dónde terminaba el Grupo México y dónde comenzaba la Secretaría de Gobernación?”

Los enhuelgados

A las afueras de la sede de la sección 65 todos los días hay decenas de hombres rudos, los mineros que hacen sus “guardias”. Tras las presentaciones, rodean a los visitantes. Los mineros que permanecen fieles a la 65 reciben cada semana mil cien pesos, un apoyo que les entrega el sindicato nacional pero que casi todos llaman “la ayuda del licenciado Napoleón”. Es más de lo que ganarían en una maquiladora, pero mucho menos de lo que estaban “acostumbrados” a recibir en la mina.

Una de las consecuencias no por obvia menos dolorosa es que los divorcios se multiplicaron. “Las historias de sus matrimonios en muchos casos no son felices. En Cananea rompieron el tejido social”, dice Leopoldo Santos, investigador de El Colegio de Sonora.

Se pregunta qué han hecho para vivir y los mineros responden uno tras otro:

— ¿Trabajar? ¿Sobrevivir? De lo que sea.

— Pero no nos dan nada porque dicen que estamos *enhuelgados*.

— Yo trabajo en una fundidora que le surte a la mina.

— Si tienes un apellido que te identifique con el sindicato nomás no te dan trabajo.

— De barrendero, de jardinero, de pintor, lavando carros, de lo que sea.

— El de la gasolinera que pasamos es minero.

— Y ese taxista que va ahí, también.

—A los mayores de cincuenta no nos dan jale en ninguna parte.

—Lo primero que nos preguntan es dónde trabajamos antes. Si decimos que en la mina, viene otra pregunta: “¿Ya te liquidaste?” Y si decimos que no, pues nunca nos llaman.

La esperanza nunca es vana, dice el clásico, pero en Cananea, tras siete años de huelga y tres de la toma de la mina por la policía federal, la esperanza pasa delante de las narices de los mineros a diario: cientos de vehículos de las compañías contratistas entran y salen a toda hora.

La catarata de pequeñas historias llega, inevitablemente, al tema de la seguridad dentro de la mina:

—Nadie habla de los que fallecen aquí por las fallas de seguridad en la mina.

—Se los llevan a otro lado, los ocultan, no quieren que se sepa.

—Sólo sabemos de los que son de aquí, porque no pueden ocultar a los muertitos o los heridos cuando son de Cananea.

—Ahí está el caso de Luis Martínez, que se electrocutó.

—Y Francisco Campas.

—Y Abel Aguilar.

La lista de Bambino

Los autobuses amarillos llevan a los nuevos empleados a sus “hogares”: viejas bodegas o barracas de lámina don-

de se hacinan en literas o se echan sobre colchonetas, a la manera de los jornaleros en los campos de jitomate de Sinaloa. La diferencia es que aquí no hay familias, sino únicamente hombres solos.

Algunas de esas “viviendas” son propiedad, cuentan lugareños, de la familia del alcalde Francisco Tarazón, un hombre joven a quien apodan *Bambino*.

Hace tres años, la oficina que ocupa el alcalde era custodiada por granaderos enviados por su compañero de partido, el gobernador Guillermo Padrés. En estos días, en la plaza frente a la Presidencia Municipal sólo se cubren del sol un par de desocupados y un bolero.

De cara a las primeras preguntas, *Bambino* agradece que la “mentalidad” del Grupo México haya cambiado con el conflicto, pues antes era “un poco más cerrado en cuanto a los apoyos o nada más apoyaba a ciertos sectores, hoy se abrió”.

Entonces comienza el recuento de los beneficios: “A la ciudad nos va a apoyar con el relleno sanitario, con pavimentación; nos está apoyando con los juegos de un parque infantil, nos va a apoyar con la rehabilitación del aeropuerto, con una laguna de oxidación...”

Se pide al alcalde que diga cuáles obras de su lista ya están entregadas o en curso. Menciona dos: la cerca de la unidad deportiva y los módulos de juegos en el parque DIF. “Pues hasta ahí”, subraya.

Las demás son “proyectos” que él ha entregado y cuya ejecución dependerá de la voluntad generosa de Germán Larrea.

Aunque no corresponde a su ámbito de competencia, el alcalde menciona también el hospital que, dice,

quedará concluido en febrero del año próximo. El costo de la obra será de 142 millones de pesos, a tercios que ponen la empresa y los gobiernos federal y estatal.

Pero ya no será un nosocomio exclusivo para los mineros de Cananea y sus familias, como el cerrado por Grupo México en mayo de 2008, sino un hospital regional del sistema de salud del gobierno de Sonora (aunque el rey de las promesas Lozano aseguró que sería del IMSS). Dicho en otras palabras, Grupo México ya no correrá con los gastos médicos de sus empleados, como establecía el contrato colectivo de trabajo (y dado que ahora la gran mayoría no son empleados suyos sino de empresas *outsourcing*, la empresa minera tampoco pagará cuotas al Seguro Social).

Hasta ahora el hospital es un esqueleto de metal a las afueras de la población. Al lado, mucho más avanzada, está la obra de un “complejo recreativo”, que según el alcalde tendrá salas de cine, tiendas y un boliche.

En tanto, el antiguo hospital, El Ronquillo, es una clínica del seguro popular, que cierra temprano y donde el mobiliario y los insumos son más que raquíticos.

—Ya están construyendo el hospital— se dice a uno de los mineros.

—Uno de treinta camas, es lo que teníamos en El Ronquillo. ¿Y luego sin medicamentos? De forma injusta, nos quitaron todo. La responsabilidad fue de Lozano. Fue ilegal, una arbitrariedad— responde Ernesto Molina Álvarez, minero retirado y dueño de un taller eléctrico donde alguna vez hubo cinco empleados aunque hoy, a falta de clientela, el propietario atiende solo.

“Nos quieren rematar”

Molina Álvarez recuerda que al privatizarse la mina se hizo el compromiso de que los mineros serían incorporados al régimen del Seguro Social y que, mientras tanto, la empresa mantendría el servicio médico bajo su responsabilidad. “Nunca se hizo, y ahora ni tenemos hospital ni tenemos pensión del IMSS.”

A Molina y el resto de los retirados les pegó más fuerte el cierre del hospital. “Grupo México tiene un problema con los cananenses: quiere rematarnos.”

El gobierno de Sonora, entonces encabezado por Eduardo Bours, ofreció a los trabajadores los servicios de salud estatales. Eso sí, de entrada les dijeron que ni soñarían con los medicamentos de marca que solían recibir. Los primeros afectados fueron diez mineros retirados que recibían hemodiálisis. Luego siguieron los enfermos de reumatismo.

“Hemos perdido una cantidad horrorosa de compañeros, de esposas de compañeros, porque nos han cortado medicamentos indispensables”, dice Molina. Ni qué hablar del resto de las promesas que el gobierno federal y la empresa hicieron recién ocupada la mina por la policía: “En el show que hicieron Javier Lozano y la empresa se comprometieron a muchas cosas, pero nada.”

Del sindicato blanco al sindicato “de colaboración”

11 de junio. Los asesores se quedaron mirando entre sí, pues no entendían cabalmente la instrucción. Recién nombrado secretario del Trabajo, en sustitución de Carlos Abascal, el potosino Francisco Salazar les había pedido un nombre: “Hay que ir contra algún líder sindical, el que sea”.

Uno de los presentes recuerda que el funcionario foxista habló muy claro en esa junta de mediados de 2005: afianzar su posición como secretario pasaba por “chingar” a un líder sindical.

Salazar pretendía con ello, según la misma fuente, “librarse del peso” de su antecesor en el cargo, quien había pasado a la Secretaría de Gobernación y cuyos zapatos, a su parecer, “le quedaban muy grandes”. No hubo, pues, una decisión estratégica ni mucho menos el afán de ir contra la “corrupción sindical”.

Los asesores de Salazar pusieron nombres sobre la mesa. Al final, después de manosear la baraja, se eligió a Napoleón Gómez Urrutia, porque “tenía conflictos con Leonardo Rodríguez Alcaine, con los Larrea y con todo el mundo”.

De ahí derivó la historia conocida: la acusación de que el líder del sindicato nacional minero se había birlado cincuenta y cinco millones de dólares de un fideicomiso,

el autoexilio del líder en Canadá, un rosario de juicios que el líder ha ido ganando uno a uno, la toma de la mina por la Policía Federal en junio de 2010, la llegada de un sindicato blanco y su sustitución por uno cetemista.

Cuando ese complejo escenario cobraba forma, los mineros de Cananea decidieron irse a la huelga. El pleito entre el sindicato nacional y el grupo empresarial encabezado por el segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, no tenía ya marcha atrás cuando, en julio de 2007, los miembros de la sección 65 colocaron las banderas rojinegras por violaciones al contrato colectivo de trabajo y por la “falta de seguridad en las instalaciones”. “Nos fuimos a la huelga para proteger nuestras vidas”, dice todavía el secretario general de la 65, Sergio Tolano Lizárraga, con la memoria puesta en la tragedia de Pasta de Conchos, Coahuila, propiedad también del Grupo México y donde hasta hoy permanecen sepultados los cuerpos de sesenta y tres mineros (sólo dos fueron rescatados).

El contrato de Lozano y el contrato de la CTM

Apenas desalojada la mina por la policía, el secretario del Trabajo Javier Lozano, peleador callejero de Felipe Calderón, se apersonó en Hermosillo e hizo una promesa clave: el nuevo contrato colectivo de trabajo de la Minera de Cananea tendría “prestaciones superiores al anterior y nuevas fórmulas productivas”.

No lo desmienten “los mineros de Napoleón”, sino Javier Villarreal, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en Sonora quien,

en su calidad de cabeza del sindicato minero cetemista, detenta el contrato desde junio de 2011:

“Obviamente el contrato histórico de Cananea es otra cosa. No podíamos fijar una posición irreductible de conseguir el mismo contrato y llegamos a una negociación satisfactoria para las partes. Se lograron algunas prestaciones, si se quiere mínimas comparadas con lo que había, pero se logró que fueran superiores a las de ley.”

Entrevistado en Hermosillo, Villarreal habla primero sobre cómo fue que llegó la CTM a Cananea, sin recuento de por medio, luego de que un sindicato blanco de Monterrey se fuera sin hacer ruido: “De allá (de la Ciudad de México) surgió. Fue el Gobierno Federal el que de alguna manera habló con la empresa”.

Cuando la CTM hacía sus pininos en el gremio minero —mientras apoyaba públicamente a la sección 65— demandó y ganó la titularidad de los contratos en otros minerales. La joya de la corona, sin embargo, le cayó sin recuento ni litigio alguno.

La CTM “jugó al esquirolaje, se fue metiendo subrepticamente mientras daba un apoyo de dientes para afuera”, dice Leopoldo Santos, investigador de El Colegio de Sonora, quien ha seguido acuciosamente el conflicto.

Santos afirma que el *modus operandi* cetemista consiste en “arreglarse con el poder estatal en turno y alentar la represión a los movimientos independientes. En el caso de Cananea, en realidad estaba preparando el terreno desde tiempo atrás”.

Un sindicato demasiado blanco y otro de “colaboración”

El cetemista Villarreal afirma que, pese a todo, es “un buen contrato para arrancar... muchos beneficios en un ambiente muy complejo, porque luego de casi cuatro años de huelga el ambiente era tenso”.

¿Por qué la empresa renunció al sindicato blanco de Monterrey y se allanó a que el nuevo contrato fuera para la CTM? “Tan lo prefería que lo tenía”, dice Villarreal. Y él mismo añade que dada la “formación ideológica y la convicción sindicalista” prevaleciente en Cananea “un modelo como el de Monterrey no tenía futuro”.

Quizá la razón, sin embargo, fue que los dirigentes de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes –sindicalismo *blanco* entre los *blancos*– andaban ya en líos legales por el manejo de un fondo de retiro.

En noviembre de 2011, Jacinto Padilla y Gerardo Ibarra, secretario general y tesorero, fueron recluidos en el penal de Ciudad Juárez, acusados de posesión de armas prohibidas y del secuestro de un joven abogado que se opuso a sus tranzas y que sigue desaparecido.

De este modo, proscrito el sindicato nacional, el Grupo México se decidió por un sindicalismo que, en la descripción de Villarreal, “con el Tratado de Libre Comercio aprendió a dejar atrás la confrontación y pugna por un modelo de colaboración que implica ganar-ganar para empresas y trabajadores; un sindicalismo que usa

la huelga como instrumento de lucha y no como forma de vida”.

“El único sindicato que existe”

En Cananea los mineros muestran con orgullo las fotografías de la conmemoración del pasado Primero de Mayo. Se ve nutrido el contingente. Ese día no se supo nada de los cetemistas. “Será que somos el único sindicato que existe”, ríe Sergio Tolano.

Para el cetemista Villarreal sólo tiene una expresión: “Es un traidor”. Villarreal no se compra el pleito: “No pretendemos ninguna rivalidad con el señor Gómez Urrutia. Tratamos de ser respetuosos y trabajar para, en la medida de las posibilidades, lograr seguridad, mejores salarios y prestaciones”.

En Hermosillo se recuerda que muchas veces Villarreal apareció al lado de los mineros de Cananea en las ruedas de prensa y que en incontables ocasiones les brindó solidaridad.

La relación iba más allá. Regidor y diputado local por el PRI, amigo lo mismo de Eduardo Bours que de Manlio Fabio Beltrones, Villarreal es conocido en Sonora por disputar y ganar contratos, incluso a sus rivales cetemistas. Así se hizo del contrato de la automotriz Ford y así del control de la maquiladora Tetakawi, que tiene el sindicato más grande del ramo.

En las filas del PRI se le conoce también por haber “destapado” a Bours, pese a los deseos del entonces gobernador Armando López Nogales.

Algunos de sus colaboradores son bilingües, egresados de la universidad de la CTM o expertos en sociología del trabajo.

Uno de ellos Everardo Fimbres, fue el artífice del ingreso de Napoleón Gómez Urrutia a la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, paso indispensable para granjearse el apoyo de los sindicatos mineros de Estados Unidos y Canadá, que han jugado un papel clave en el respaldo al autoexiliado líder. Actualmente, Fimbres es el representante de la CTM en Puerto Peñasco.

El sindicato cetemista tiene mil 189 mineros, de los cuales, dice Villarreal, “entre 75 y 80 por ciento son de Cananea o de la región”. El cetemista reconoce que hay entre dos mil 500 y tres mil de empresas *outsourcing*, pero dice que ninguno trabaja directamente en la operación de la mina (en los informes a sus accionistas, el Grupo México no distingue entre los trabajadores dedicados a la operación de la mina y los dedicados a las labores de expansión, pero afirma tener cuatro mil 800 empleados).

El investigador Santos duda que la mayoría de los trabajadores, incluso los sindicalizados, sean residentes antiguos de la ciudad minera. La CTM y el Grupo México, dice, han apostado a un proceso de “*descanización*” de Cananea.

“Haga de cuenta que llegó el demonio”

12 de junio. El Alameda es un hotel para dormir vestido. La calefacción no funciona y las alfombras no se cambian hace décadas. Tiene, eso sí, salas de estar en cada piso. Algunos sillones donde un grupo de nuevos trabajadores se reúne alrededor de una *laptop*: las palabras “internet” y “facebook” se cuelan en el fluido zapoteco.

“Somos de Matías Romero, de mi pueblo venimos cinco. Apenas quince días. No nos han pagado, pero prometen buen sueldo. Aquí mismo en el hotel comemos, con unos *tickets*”, cuenta uno de los trabajadores cuando se le interrumpe.

Los zapotecos del hotel son privilegiados, aunque meten de a seis en cada cuarto. Antiguas bodegas de negocios fracasados — muchos perecieron con el cierre de la mina— son ahora “viviendas” para los trabajadores fuereños. Como son insuficientes, las empresas contratistas también han levantado cuartos de lámina, donde caben de sesenta a ochenta trabajadores. Como la empresa Tierra Caliente, que en una de sus bodegas tiene siete regaderas, ocho letrinas y colchonetas.

“Ahí los tienen tirados en el piso. Esos galerones son el verdadero contraste con las ganancias del Grupo México”, dice Carmen Figueroa, una hija y esposa de mineros que atesora los tiempos en los cuales, en la escuela primaria de Cananea les contaban la historia de “nues-

Cananea
tros mártires” (los mineros asesinados en la huelga de 1906) y, sobre todo, los días en que, cargando la lonchera, despedía a su padre en la puerta principal de la mina. “La puerta 1 la tienen bloqueada desde hace tres años, igual que la 3, con la que cerraron parte del pueblo.”

En las cercanías de la puerta 1, muchos de los comercios que se veían cerrados o trabajando a medias hace tres años, siguen igual.

Otra es la Cananea que el Grupo México pinta a sus accionistas: en Cananea se está desarrollando “un proyecto de crecimiento industrial, urbano y comunitario sin precedentes; que tendrá un impacto económico, social, de seguridad, y medioambiental en la comunidad de Cananea para transformarla en un polo industrial sustentable... un desarrollo con sentido de crecimiento”.

“Por lo menos compran un jabón”

El alcalde Francisco Tarazón tiene menos de un año en el cargo. Su antecesor, el priísta Reginaldo Moreno, fue recientemente inhabilitado por diez años debido a diversas corruptelas. A Moreno le correspondió recibir de Grupo México los primeros “apoyos”: “algunas pavimentaciones y apoyos para escuelas”. También una velaria en el auditorio del Instituto Tecnológico (en un anuncio espectacular, la empresa minera se adjudica los logros académicos de los alumnos).

Muchos cananenses se quejan de que los apoyos prometidos tras la irrupción policíaca en la mina no se cumplieron: la carretera de cuatro carriles que avanza a

paso de tortuga y los créditos para pequeñas empresas, por ejemplo.

El alcalde Bambino sale al paso: “La función del Grupo México no es el apoyo comunitario, es una empresa y su función es extraer cobre”. Finaliza el alcalde con un elogio a la minera por su apoyo al “desarrollo sustentable”. Recientemente, él fue invitado a inaugurar un criadero de guajolotes salvajes. ¿Dónde está? “Allá adentro, en sus instalaciones.”

La llegada de miles de trabajadores de fuera, admite el presidente municipal, ha provocado problemas adicionales a su administración. “Sobre todo en algunos lugares donde el drenaje es insuficiente, donde tenemos más basura; y también que tenemos que hacer más patrullajes.”

El alcalde sabe, además, que la mayor parte de los ingresos de los nuevos trabajadores no se queda en Cananea. Los nuevos trabajadores mandan remesas a Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y otras entidades donde las empresas contratistas reclutan sobre todo albañiles, para las obras de ampliación de la mina.

“Por lo menos comen aquí, y compran un jabón para bañarse”, se consuela el alcalde.

* * *

El corporativo del que forma parte la mina de Cananea tuvo, en 2012, ganancias por mil 934.6 millones de dólares, inferiores a los dos mil 336.4 millones de 2011, debido a la baja en los precios de los metales. El ochenta

por ciento de las ventas de la división minería de Grupo México proviene del cobre.

“Les sigue doliendo que no nos tienen bajo su control”

Los mineros Baudelio García y Clemente Félix Lara hablan en un recorrido para mirar la mina desde otros ángulos.

“A los accidentados los sacan de aquí para que no se sepa. Es fácil culpar al trabajador, para no tener que asumir la responsabilidad por los equipos deteriorados, dañados. Ahí a veces ni siquiera dejan entrar al director de Protección Civil del municipio. Como cuando se volcó una camioneta de la Policía Federal. Ahí murió un policía que cayó en las aguas ácidas. Y eso fue por falta de mantenimiento en el bordo de la represa.” (La versión oficial indica que en el accidente, ocurrido en octubre de 2010, falleció un trabajador y varios más resultaron con lesiones).

Con dieciséis años de antigüedad en la mina, aretes en orejas y labio, Baudelio refiere uno de los “daños colaterales” del conflicto: “Sacaron a mi hijo de la escuela. Hasta ahí en la primaria llegaron a poner granaderos”.

Unos cuarenta hijos de mineros cursaban la educación primaria en el Instituto Minerva, considerado la mejor escuela del lugar, a la cual también acudían los hijos de empleados de confianza.

Cuenta Baudelio: “Los fueron echando poco a poco. Los exhibían a la hora de pagar la colegiatura, les retenían la documentación... A la abanderada no le dieron la bandera por ser hija de un huelguista”.

A lo lejos o desde algunos de los miradores, la población de Cananea parece un conjunto de casitas de juguete pegadas a la enorme mina, un complejo de construcciones de metal, de depósitos de agua ácida, por el que circula un hormiguero de vehículos. Los enormes cerros rebanados dominan el paisaje igual que la empresa minera pretende, dicen los trabajadores en resistencia, controlar todo en la ciudad. Hasta las fiestas.

La banda de guerra de la sección 65 quiso participar en un desfile que se realiza durante la Feria del Cobre. El comité organizador, donde manda la empresa, se lo ha impedido.

“Les sigue doliendo que no nos tiene bajo su control, viviendo como en un campo de concentración, como en otros lugares donde los tienen con sus condiciones y sus reglas”, dice Baudelio.

El miedo y las promesas

Muchos habitantes de esta población se resisten a hablar del conflicto de la mina, pese al tiempo transcurrido de la supuesta solución final. “La gente está muy miedosa”, escribe desde el extranjero un nativo de Cananea a quien se pidió un contacto.

“Claro, la gente no opina porque tiene miedo de que no la dejen volver a trabajar ahí”, confirma Carmen.

La amenaza de nunca ser recontratado, o de serlo sólo para enfrentar el despido poco tiempo después es, según Figueroa, una constante en la vida de muchos cananenses.

Va de la mano de la división causada por el conflicto laboral. “Todavía hay gente que nos culpa”, reconoce Victoriano Carrillo, sabedor de que una parte de la población echaba en cara a los dirigentes del sindicato de una huelga “sin sentido” que causó un desastre económico general.

El minero retirado Ernesto Molina Álvarez lo mira de otro modo: “Sí, hubo comerciantes que culpaban al sindicato. Pero todavía hoy les preguntamos ¿cuándo ha cruzado la puerta de su negocio alguien de la empresa? No, los que sosteníamos la economía de aquí éramos los mineros. La culpa no es sino de los abusos del grupo México”.

El gobierno y la empresa anunciaron inversiones millonarias en Cananea, la mayor parte destinada a “reconstruir” sus instalaciones y ampliar la extracción de mineral. Tales inversiones saltan a la vista si se miran el constante trajín de vehículos que entran y salen de la mina, los hoteles a tope, los casinos que abrieron sus puertas mientras el hospital sigue en construcción.

“Cómo puede haber un pueblo en auge con sus habitantes pobres. Hay lana, sí, pero sólo para el empresario”, dice Sergio Tolano.

Los mineros sostienen que los beneficios para los habitantes de Cananea son escasos. Hablan, por ejemplo, de la promesa de créditos para pequeñas empresas y de la oferta de que la compañía minera compraría sus insumos a comerciantes locales.

“Hicieron un llamado Grupo Encuentro, que nada más se dedicó a recoger latas vacías”, asegura Carmen.

Y continúa: “Algunos comerciantes se la creyeron y se surtieron de mercancía... todavía la tienen. Una burla”.

Para Carmen Figueroa, los mineros que resisten son la “gente de calidad” de Cananea. “Son los fuertes, los veo todavía de pie, en sus guardias. Gente que tiene esperanzas de algún día volver a trabajar en la mina. Claro, si hay alguien que les recuerde a los empresarios que ellos sólo tienen la concesión, que no son dueños ni de las conciencias ni de las personas. Cananea quiere la mina sin el Grupo México, porque cuando ese grupo vino hagan de cuenta que llegó el demonio.”

Arturo Cano

Arturo Cano es periodista y ha colaborado en más de una decena de medios electrónicos e impresos. Fue fundador y director del suplemento político del diario *La Jornada*.

Es coautor de *Salinas a juicio* (Planeta) y autor de *México de salario mínimo*, y de *López Obrador y la resistencia civil*.

En su trabajo de reportero ha recorrido todo el país y ha sido enviado a Venezuela, Ecuador, Perú, Honduras, Brasil y Estados Unidos.

Es también coautor de *Doña Perpetua. El poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo*.

Hace ya unos años, Carlos Monsiváis lo incluyó en una breve lista de “jóvenes maestros del periodismo mexicano”.

Actualmente es cronista y reportero de asuntos especiales de *La Jornada*.

Este libro se imprimió en la Ciudad de México en el
mes de enero del año 2015.

Distribución gratuita, cortesía de la
Rosa Luxemburg Stiftung y
Para Leer en Libertad A.C.

Queda prohibida su venta.
Todos los derechos reservados.